

**Sören Brinkmann**

## **La recuperación de la “memoria histórica”: entre el incumplimiento institucional y la instrumentalización política**

### **1. ¿Final del silencio, final de la reconciliación?**

Es sólo en el septuagésimo aniversario de su estallido que la Guerra Civil y la subsiguiente dictadura del general Franco se han convertido en temas de amplio interés público y mediático. Pero esta presencia en la esfera pública —celebrada por algunos como ruptura definitiva de un “olvido impuesto”— vino acompañada de nuevos enfrentamientos ideológicos que evocan las profundas divisiones políticas de la España de los años treinta. Con la generación de los testigos casi extinta por razones biológicas y una sociedad profundamente transformada desde la década de los años treinta se observa, especialmente en la extrema derecha, el despliegue de discursos difamatorios que en poco se diferencian de la propaganda del régimen que defienden. Más preocupante resulta que el extremismo particular de unos Moa o Jiménez Losantos ejerce gran influencia en el ideario de buena parte de los sectores conservadores del país, mientras que apenas se dejan oír voces más razonables y conciliadoras. La petrificación de las posturas del Partido Popular en todo lo que a políticas de la historia se refiere es sólo la otra cara de la misma moneda. Pero, ¿es esta polarización de opiniones el precio inevitable de la confrontación pública con un pasado guerracivilista?

La resurrección de argumentos filo-franquistas resulta, en todo caso, estrechamente vinculada con la aparición a partir del nuevo milenio del llamado movimiento por la “recuperación de la memoria histórica” que por su parte hizo del trágico destino del bando republicano un asunto público. Con actividades tan espectaculares como la exhumación de fosas anónimas este movimiento no sólo alcanzó notable atención mediática sino también una muy rápida extensión por prácticamente todo el territorio español. Así, el grupo pionero, la Asociación por la

Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) fundada por Emilio Silva en León, ya cuenta con una decena de grupos asociados en diferentes zonas del país, y hay toda una serie de otras iniciativas locales y regionales que defienden fines similares.

Esta proliferación de iniciativas cívicas tuvo lugar poco después de que el Partido Popular de José María Aznar ganara en el año 2000 su primera mayoría absoluta. Y no extraña, por tanto, que los partidos de la oposición, humillados por su derrota electoral, se sumaran a este movimiento para recuperar la iniciativa política y atacar a los populares en uno de sus puntos más débiles. De tal manera se explica toda una serie de propuestas parlamentarias de PSOE e Izquierda Unida, destinadas a condenar el franquismo y homenajear a sus víctimas tras más de veinte años de inactividad en este asunto. Como más comprometida se mostró Izquierda Unida, desde cuyas filas surgió en 2002 la iniciativa del Foro por la Memoria, asociación que hoy en día gestiona la más importante página web de noticias del movimiento. El partido del gobierno, sin embargo, en vez de cambiar de actitud recrudesció su discurso e hizo fracasar con su mayoría absoluta la práctica totalidad de propuestas parlamentarias lanzadas desde los bancos de la oposición. Este bloqueo se correspondía con el argumento de los populares de no querer “reabrir viejas heridas y revivir viejos rencores” después de haber alcanzado la reconciliación nacional, ejemplificada por la Constitución democrática de 1978.<sup>1</sup>

Ante las negativas del Partido Popular, fue la inesperada victoria de los socialistas en las elecciones generales de 2004 la que levantó nuevas esperanzas en las filas de las asociaciones cívicas. Y el nuevo presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo abuelo también había caído víctima de la represión franquista, se apresuró a anunciar medidas rápidas para satisfacer las demandas de las asociaciones. De tal manera, el 10 de septiembre de 2004 se creó una Comisión

---

<sup>1</sup> El único momento de encuentro entre los diferentes grupos parlamentarios se produjo cuando en noviembre de 2002 se acordó en la Comisión Constitucional una resolución de reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. Pero mientras que el Partido Popular lo entendió como cierre definitivo, para los otros grupos no era más que el principio oficial para la llamada recuperación del pasado. Véase al respecto el discurso del diputado popular Manuel Atencia Robledo en: *Diario de Sesiones* 20/11/2002.

Interministerial con el cometido de “estudiar la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo” y proponer medidas para su “rehabilitación moral y jurídica”.<sup>2</sup> Año y medio tras la subida al poder de los socialistas, sin embargo, no quedaban muchas esperanzas acerca de un rápido cumplimiento de lo prometido. En más de una ocasión el gobierno ya había incumplido su propio horario de trabajo. Y la desilusión se generalizó cuando en septiembre de 2005 la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, comunicó la decisión del Ejecutivo de “ralentizar” los trabajos con motivo de buscar una solución que “contente a los dos bandos y no sirva para reabrir heridas, sino para cicatrizarlas”.<sup>3</sup>

La vacilación del PSOE en el gobierno contrastaba obviamente con la actitud reivindicativa de tres años antes, cuando se había tratado de denunciar las inclinaciones filo-franquistas del Partido Popular. Pero la tarea de legislar en una materia que concierne a toda una época de la historia reciente del país resultó mucho más complicada de lo que se pensaba. La clave del anuncio de septiembre, sin embargo, era otra. Porque intervenir desde la política en la llamada recuperación de la memoria mediante propuestas legislativas que contienen también condenas explícitas del bando franquista significaba, efectivamente, una clara ruptura con el dictado de la Transición de no valorar políticamente el pasado reciente. Fue precisamente la idea de una culpa histórica compartida entre los dos bandos la que constituyó la base de la reconciliación que por su parte hizo posible la vuelta pacífica a la democracia. Por tanto, el único camino de reconocer oficialmente el destino del bando republicano sin perder de vista el espíritu de reconciliación llevaba por la renuncia a culpabilizaciones unilaterales y el reconocimiento de todas las víctimas. De ahí la decisión del Ejecutivo de reorientar el rumbo de sus trabajos y preparar una ley que, al menos de manera simbólica, menciona también a las víctimas del bando franquista.

---

<sup>2</sup> Cfr. Aizpeolea, L. R.: “Las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura serán rehabilitadas por ley”, en: *El País*, 11/09/2004.

<sup>3</sup> Cfr. Cué, Carlos E.: “De la Vega frena la ley de memoria histórica para acoger a ambos bandos”, en: *El País*, 12/09/2005.

## 2. El discurso de las víctimas

Ahora bien, lejos de contentar a los críticos de la oposición conservadora, esta nueva fórmula sólo sirvió para abrir una profunda brecha entre el gobierno socialista y las iniciativas cívicas. Estas seguían insistiendo en la necesidad de limitar las medidas al conjunto de las víctimas republicanas, dado el reconocimiento del que habían disfrutado los represaliados del otro bando a lo largo de casi cuarenta años. Además se sospechaba que la intención del Ejecutivo de consensuar la ley con los populares llevaría a la moderación de sus contenidos. Gracias a la intervención de organizaciones de derechos humanos, en concreto el Equipo Nizkor y Amnistía Internacional, las demandas de las asociaciones habían alcanzado una dimensión muy amplia. Porque en los años 2004 y 2005 estas organizaciones habían presentado dos informes independientes que a base de la legislación internacional de derechos humanos, acumulada en el seno de las Naciones Unidas, propusieron todo un catálogo de medidas de diferente índole para fomentar la más amplia confrontación de la sociedad española con su propio pasado. En este sentido, el proyecto de ley debería incluir –aparte de medidas de reparación simbólica y material– la rehabilitación jurídica de las víctimas mediante la anulación de juicios sumarios de los tribunales de guerra así como la investigación de todos los casos de violación de derechos humanos, la averiguación de las responsabilidades institucionales respectivas y su enjuiciamiento (Equipo Nizkor 2004; Amnistía Internacional 2005).

Cabe subrayar que especialmente esta última demanda afectaría a una de las columnas vertebrales de la transición política a la democracia que consistía en la mutua amnistía de delitos violentos por motivo político. De tal manera, la ley de amnistía de octubre de 1977 no sólo liberó a muchos antifranquistas de las cárceles del régimen sino que garantizó también la impunidad para todos los delitos violentos cometidos por las fuerzas de orden público franquistas. Desde un planteamiento estrictamente jurídico de derechos humanos, del que partían el Equipo Nizkor y Amnistía Internacional, esta norma es, efectivamente, reproachable. En manos de las asociaciones españolas, sin embargo, tal reprobación se convirtió a menudo en caballo de batalla de reivindicaciones políticas que iban mucho más allá de los derechos de las víctimas. Es cierto que el recuerdo de las víctimas de la represión franquis-

ta apenas se deja separar de su contexto histórico y de los valores y actitudes políticas que éstos defendían en su momento. Pero también es necesario subrayar que el recuerdo se construye desde el presente y que por tanto depende mucho del que recuerda, qué signo y qué sentido se da a tal acto. En este sentido, la ARMH –asociación pionera de Emilio Silva– sigue la estrategia de limitarse al trabajo de rescate de los “desaparecidos”, dejando a la discreción de los familiares, cómo celebrar el acto de su entierro posterior (Bernecker 2005).

Tal neutralidad política, sin embargo, no parece ser el denominador común bajo el cual se ha desarrollado la mayor parte de actividades dedicadas a la llamada recuperación de la memoria. Porque respecto a conmemoraciones y actos públicos del movimiento, cuyo número se ha multiplicado de manera vertiginosa en los últimos años, hay que constatar un claro predominio de conceptos políticos como “lucha antifascista”, “libertad” y “democracia”. Y aparte de esto, son los colores de la Segunda República los que se han convertido en decoración obligatoria y seña de identidad de todo el movimiento. Dicho de otra manera, apenas se pudo ver en los últimos años acto público, homenaje o conmemoración de las víctimas del franquismo que no reivindicase la bandera tricolor y los valores democráticos.

En perspectiva histórica esta proliferación de los colores republicanos debe, por lo menos, sorprender. Porque en vez de aglutinar diferentes tendencias políticas el proyecto republicano se mostró incapaz de dar cohesión e identidad a una sociedad profundamente crispada. En otras palabras, lo que llenaba los espacios públicos antes y después del estallido de la guerra no fueron en su mayor parte símbolos republicanos sino las banderas de partidos y sindicatos (Radcliff 1997). Hubo, eso sí, muchos que apoyaban lealmente el régimen republicano: alcaldes y funcionarios estatales, civiles y políticos de muy diferentes colores y hasta policías y militares comprometidos con la causa republicana. Pero también es verdad que a la Segunda República le faltaban las cohortes de republicanos decididos a defenderla, y eso no solamente dentro de los sectores conservadores de la sociedad. Porque ya a principios de los años treinta y más aún tras el estallido de la Guerra Civil predominaban en gran parte de las masas trabajadoras valores políticos que se desmarcaban claramente del ideario liberal-burgués en que se basaba la República. La revolución social, desencadenada por la rebelión militar en amplios sectores de la industria y la agricultura de la

zona republicana, es un hecho de la historia social española que en su momento no podía sino producir intereses socio-políticos opuestos a la legalidad republicana. Y sin embargo, nadie pondría en duda que las colectivizaciones revolucionarias llevadas a cabo por los sindicatos de socialistas y anarcosindicalistas tras el 18 de julio formaron parte del proceso político de la Segunda República.

Ahora bien, dado el hecho de que hoy en día no se excluye de la memoria histórica a ninguna víctima del franquismo por sus posibles convicciones revolucionarias, resulta necesario preguntar por el lugar de la revolución social en la memoria republicana. Quien estudia la inmensa cantidad de textos, comunicados y manifiestos del movimiento, vertidos en su mayor parte por Internet, se dará cuenta de que las referencias a la revolución social de 1936 son prácticamente inexistentes. ¿A qué se debe este olvido de la revolución social? En primer lugar parece que se debe a la falta de herederos “voluntarios” dispuestos a asumir este legado. Es bien sabido que el sindicato anarcosindicalista de la CNT, el defensor más consecuente de la revolución social, ha perdido después de la transición a la democracia prácticamente todo su antiguo peso. Sin embargo, es llamativo que hasta ahora fue únicamente la CNT la que en la Barcelona del año 1980 celebrase unas jornadas de debate político con motivo de conmemorar el 19 de julio, día del triunfo de la revolución en esta misma ciudad.<sup>4</sup>

Para las otras fuerzas políticas y sindicales, en cambio, la revolución social constituye un legado anacrónico y poco apropiado para legitimar sus fines políticos. Cabe recordar que la represión política que se desencadenó en la zona republicana a consecuencia de la revolución también fue notable, causando según recientes estimaciones un total de víctimas mortales de entre 35 y 50.000 (Juliá 2006: 407ss.). Es evidente, por lo tanto, que este concomitante “negro” impide la identificación con el movimiento revolucionario. La tradición republicana, en cambio, no plantea tales problemas, lo cual explica su uso como cobertura ideológica para todas y cada una de las “víctimas del franquismo”, fuesen éstas republicanos, socialistas, comunistas o anarcosindicalistas.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Cfr. *Avui*, 20/07/1980.

<sup>5</sup> Ante las discrepancias ideológicas en el bando republicano y los conflictos sangrientos en la zona republicana durante la guerra parece un chiste de mal gusto

Además, la insistencia actual en la idea republicana hace evidente que en muchas ocasiones no se trata sólo de los derechos de las víctimas del bando republicano. Hay amplios sectores del movimiento de la memoria cuyas actividades apuntan precisamente a la reivindicación de la tradición republicana como alternativa política para el futuro del país. Fue el presidente del Foro por la Memoria, José María Pedreño, quien se expresó de la manera más rotunda en este sentido. Según el título de un artículo suyo, difundido por la misma página del Foro en abril de 2005, “Recuperar la Memoria es luchar por la III República”.<sup>6</sup>

Cabe subrayar que en esta línea argumentativa también entra en juego la reivindicación de levantar la impunidad acordada durante la Transición. Porque el ataque a la Ley de Amnistía de 1977 sirve muy bien para poner en duda el proceso mismo de la Transición y sus resultados políticos, lo que por su parte resulta ser la contrapartida lógica del intento de recuperar la tradición republicana. En palabras del presidente mismo del Foro: “La Ley de Amnistía de 1977, y toda la legislación posterior que se apoyó en el espíritu de la misma, están impidiendo, en la actualidad, la evolución hacia una democracia avanzada...”. Y más tarde este autor agrega su convicción de que “la Casa Real Española se encuentra detrás de todo impedimento para perseguir la impunidad del régimen franquista en nuestro país...”. Dicho en otras palabras, la presunta necesidad del cambio de la forma de Estado se convierte en condición para la plena recuperación de la memoria y viceversa.

Dada la frecuencia con la que se repite, este argumento se ha convertido ya en un dogma político para muchos que participan activamente en el movimiento por la memoria. Y con el septuagésimo quinto aniversario de la proclamación de la Segunda República en abril de 2006 se pudo observar un momento culminante de su despliegue público. En múltiples puntos del país asociaciones y partidos organizaron ofrendas florales y concentraciones, todas ellas, ciertamente, poco

---

cuando el autodeclarado comunista José María Pedreño –presidente del Foro por la Memoria– critica la neutralidad política de la rival ARMH de Emilio Silva y se alza como defensor del legado político de socialistas, anarquistas y republicanos. Véase al respecto Pedreño, José María: “Apoyar a la ARMH es enterrar la memoria”, en: *Foro por la Memoria* <<http://www.nodo50.org/foroporlamemoria/>> (23.01.2004).

<sup>6</sup> Cfr. Pedreño, José María: “Recuperar la Memoria es luchar por la III República”, en: *Foro por la Memoria* <<http://www.nodo50.org/foroporlamemoria/>> (14.04.2005).

apropiadas para hacer justicia a una época tan agitada y contradictoria como fue la década de los años treinta. Porque tales exaltaciones, por lo general, no suelen nutrirse del interés crítico. Parece, por el contrario, un malestar difuso respecto a la actual democracia que se mezcla con las pretensiones del movimiento por la memoria para coincidir en la recuperación idealizadora de la tradición republicana y la reivindicación de la Tercera República en clave mesiánica.

Esta nueva corriente de republicanismo, que tan abiertamente pone en entredicho la Transición y sus resultados, corresponde a una coyuntura política que tiene sus orígenes en la subida al poder del Partido Popular tras 14 años de gobierno socialista. Pero aparte de lo coyuntural hay, como observa el historiador Julio Aróstegui, un factor generacional que también influye sobre esta corriente. Porque con los años noventa apareció en la escena pública una nueva generación, cuya referencia política es únicamente la democracia de los años ochenta. Y a la vez perdió protagonismo la generación anterior, que es precisamente la que se formó en el tardofranquismo y que protagonizó la Transición. En términos de “mentalidad generacional” ese cambio significó la paulatina pérdida del espíritu de reconciliación y consenso que había informado los primeros años de la nueva democracia y que ahora se ve reemplazado por una nueva polarización de conceptos e ideas.

El impacto de este factor generacional se refleja, por un lado, en la gran cantidad de jóvenes militantes que acompañaron la victoria electoral del Partido Popular en 1996; y se refleja de igual manera en las visiones más críticas sobre el pasado reciente desde los ámbitos de la izquierda. Porque, efectivamente, los que más intervienen en la llamada recuperación de la memoria son en su mayoría los hijos de la generación de la posguerra, en búsqueda de la historia silenciada de sus abuelos (Aróstegui 2006). Una buena confirmación de esto aportan los resultados de una encuesta acerca de las preferencias constitucionales en la sociedad. Según estos datos, los que favorecen una república en vez de la actual monarquía apenas alcanzan un cuarto de la población. Sin embargo, la preferencia republicana aumenta según baja la edad de los encuestados, llegando en la categoría de los más jóvenes a un notable 38%.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Cfr: Escrivá, Ángeles: “España da un notable a la monarquía pero un 38% de jóvenes prefiere la República”, en: <[www.http://elmundo.es](http://elmundo.es)> (20/11/2005).



### 3. La instrumentalización política

El intento de hacer de la recuperación de la memoria el instrumento de un nuevo republicanismo también se tradujo a nivel político. De tal manera, el Partido Comunista, socio mayoritario de Izquierda Unida, muestra desde hace algún tiempo una clara tendencia de desmarcarse, al menos retóricamente, del consenso constitucional vigente, consenso que en su momento el mismo partido había votado con gran mayoría. A las alturas del nuevo milenio, sin embargo, parece que las cosas han cambiado. Porque en el décimo séptimo congreso del PCE en junio de 2005 se reivindicaba —en la línea del argumento arriba citado— “la memoria [de las víctimas del franquismo] y la rehabilitación de todos sus derechos vulnerados” como una de las condiciones necesarias “para que pueda superarse totalmente la situación de democracia ‘otorgada’”.<sup>8</sup>

Igual de comprometido con tales fines se muestra —aparte de los comunistas catalanes— Esquerra Republicana de Catalunya, el partido hegemónico de la izquierda catalanista de los años treinta, que después de la transición se vio relegado a un papel secundario. Las elecciones catalanas de noviembre de 2003 y la derrota relativa de Convergència i Unió, sin embargo, permitieron a este partido salir de su marginalización política y jugar un papel hasta decisivo en la formación de gobiernos. Porque aparte de constituir un soporte indispensable para el llamado *tripartit* en Catalunya también se necesitaban los votos de Esquerra en la investidura del nuevo gobierno socialista algunos meses más tarde. Y fue precisamente en esta última ocasión cuando Esquerra puso como condición de su consentimiento la pronta elaboración de una “Ley de Memoria”. Hasta qué punto este compromiso con la memoria está condicionado por intenciones políticas lo dejó bien claro el diputado de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà. Según un artículo suyo publicado recientemente en *La Vanguardia*, para Esquerra Republicana “la memoria histórica no se reduce sólo a la reparación de las víctimas; también debe plantear el reconocimiento de los valores republicanos” y “evolucionar al conjunto de las menta-

---

<sup>8</sup> Cf: las “tesis políticas” del XVII Congreso del PCE, en: <[http://www.pce.es/pcei\\_pl.php?id=512](http://www.pce.es/pcei_pl.php?id=512)> (marzo 2006).

lidades de los pueblos ibéricos” a fin de deslegitimar el régimen monárquico vigente.<sup>9</sup>

Aparte del argumento republicano la intervención de Esquerra en el asunto de la memoria histórica introdujo otro componente de distanciamiento político, resumido en lo que se suele llamar “victimismo” catalán. Es cierto que la idea de la Guerra Civil en Cataluña como una guerra impuesta desde fuera se ha convertido desde hace mucho tiempo en un tópico del discurso catalanista. Con la reaparición de Esquerra en el escenario político, sin embargo, el argumento victimista alcanzó una nueva importancia a la hora de redefinir las relaciones entre Barcelona y Madrid. Un claro reflejo de esto se puede encontrar en una proposición no de ley expuesta poco después de la investidura del gobierno socialista. En esta ocasión se exigía, entre otras cosas, que el gobierno central pidiese perdón por el fusilamiento en 1940 del presidente de la Generalitat, Lluís Companys.<sup>10</sup> Y algo más tarde se repetía tal petición aún cuando esta vez fuera el rey de España el que debería pedir perdón por ser “la rótula entre la dictadura y el Estado democrático”, según expresión de Joan Tardà.<sup>11</sup> El cálculo de estas maniobras aspiraba, evidentemente, a que el Estado español como sucesor jurídico de la dictadura asumiese la plena responsabilidad por la represión franquista en Cataluña, cosa que ni el rey ni tampoco el gobierno de Zapatero —en este caso en buena sintonía con el Partido Popular— estaban dispuestos a aceptar.

Ahora bien, el caso del presidente Companys es interesante también por ser una de las figuras más emblemáticas de los represaliados por juicios sumarios del franquismo. Refugiado en el Sur de Francia tras la caída de Cataluña, el ex-presidente pronto cayó en manos de la Gesta-po que le devolvió a las autoridades franquistas. De vuelta en Barcelona fue sometido a un tribunal de guerra que le condenó por “rebelión militar” a pena de muerte. La sentencia fue ejecutada el 15 de octubre de 1940 en la cárcel del castillo de Montjuïc. Y el mismo día de su

---

<sup>9</sup> Cfr: Tardà i Coma, Joan: “ERC y la memoria histórica”, en: *La Vanguardia*, 20/07/2005.

<sup>10</sup> Cfr: “ERC quiere que el gobierno pida perdón por el fusilamiento de Companys y haga un acto de desagravio”, en: *Europa Press*, 14/05/2004.

<sup>11</sup> Cfr: “ERC pretende que el Rey ‘pida perdón’ en nombre del Estado a las víctimas del franquismo”, en: <<http://www.elmundo.es>> (18/11/2005).

muerte empezó la mitificación de su persona que le convirtió en símbolo de los derechos violados de Cataluña y en máxima expresión de su sufrimiento colectivo. Con la muerte de Franco y el camino abierto para la recuperación de la autonomía política la figura de Companys alcanzó nueva utilidad política como ejemplo de sacrificio y fuente de legitimidad de las aspiraciones políticas de la región. Y no extraña que ya en estas fechas apareciera también la idea de exigir su rehabilitación jurídica mediante la anulación de la sentencia que le costó la vida. Pero en vísperas del quincuagésimo aniversario de su fusilamiento en 1990 el Parlament de Catalunya, dominado por Convergència i Unió, decidió retirar tal reivindicación a cambio de un gran homenaje público en honor a su persona (Grup per a l'anul·lació 1991).

Fue precisamente Esquerra Republicana la que en este momento no quedó satisfecha con tal decisión y que hace dos años y bajo la nueva constelación del gobierno tripartito en Cataluña y un Ejecutivo socialista en Madrid volvió de nuevo sobre el asunto. El primer fruto de sus esfuerzos fue que en 2004 la vicepresidenta como primera representante del gobierno central acudiera al homenaje a Lluís Companys que la Generalitat celebra cada 15 de octubre delante de su mausoleo en el Fossar de la Pedrera. Y en esta ocasión dio a conocer el acuerdo del gobierno de preparar de forma urgente un proyecto de ley para “restablecer la dignidad y el honor” de Lluís Companys.<sup>12</sup> Ahora bien, lo que en el fondo parece un acto de rehabilitación justa comporta en realidad enormes dificultades jurídicas. Porque hay que tener en cuenta que la anulación de la sentencia de Companys constituiría un precedente jurídico con respecto a todos los juicios sumarios y sentencias políticas de casi 40 años de jurisdicción franquista. Y además, representaría un acto de derogación retroactiva de la legalidad franquista, cosa que el Tribunal Constitucional ya se había negado a hacer en dos ocasiones. No extraña, por tanto, que un año más tarde, y al contrario de lo prometido, el Ejecutivo no había avanzado en el asunto.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Cfr: Rusiñol, Pere: “El gobierno inicia la rehabilitación oficial del presidente Lluís Companys”, en: *El País*, 16/10/2004.

<sup>13</sup> Hasta entre expertos es objeto de controversia si es posible anular los juicios sumarios del franquismo. Juristas como Carlos Castresana Fernández y José Antonio Martín Pallín se pronunciaron a favor de esta medida. Véase sus respectivos artículos en: *El País*, 18/11/2004 y *El País*, 15/06/2004.

#### 4. Un proyecto de ley controvertido

Las discrepancias entre el Ejecutivo y los otros partidos de izquierda se pusieron de relieve con toda claridad cuando en febrero de 2006 Esquerra presentó un propio proyecto de ley. Porque también en esta ocasión ERC junto con los otros grupos izquierdistas insistió en el victimismo exclusivo del bando republicano, titulando su propuesta “Proyecto de Ley sobre Memoria Histórica Republicana y Antifascista”. El gobierno, por su parte, se atenía a su propio horario de trabajo que, evidentemente, apuntaba a encontrar el momento políticamente menos sospechoso para presentar su proposición. De tal manera, tuvieron que pasar tres fechas simbólicas –el 14 de abril, día de la proclamación de la República, el 22 de junio, día de la declaración de 2006 como Año de Memoria y el 18 de julio, día del estallido de la Guerra Civil– antes de que el Ejecutivo entrara en acción. La propuesta socialista se presentó finalmente el viernes, 28 de julio, último día de sesiones en el Congreso antes de la clausura de verano.

La intención de no causar sensación también se refleja en su contenido. La propuesta pretende profundizar la reconciliación entre los españoles, basada en el espíritu de la Transición y los valores de la democracia que surgió de ésta. El texto declara injusto todo tipo de violencia, represión o persecución acaecida durante la Guerra Civil y la dictadura por motivos políticos y reconoce el derecho individual a la memoria personal y familiar. Su medida principal es la reparación moral y material de los daños sufridos. De tal manera, se proyecta la rehabilitación mediante “Declaración de reparación y reconocimiento personal” de los que sufrieron condenas por juzgados y tribunales de guerra. Además, se definen las responsabilidades de las administraciones públicas en cuanto a la localización y exhumación de los desaparecidos. Y otros cinco artículos (del 8 al 12) se refieren a prestaciones financieras destinadas a completar la legislación de indemnizaciones y pensiones que ya había surgido en distintas ocasiones desde finales de los años setenta.<sup>14</sup> El total de los costes de la ley ascenderá a unos 60

---

<sup>14</sup> Cfr: “Proyecto de Ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”, en: <[http://www.abc.es/informacion/pdf/proyectoley\\_guerra\\_civil.pdf](http://www.abc.es/informacion/pdf/proyectoley_guerra_civil.pdf)> (julio 2006).

millones de euros y se calcula que habrá más de 31.000 beneficiarios directos.<sup>15</sup>

Si estas medidas pueden ser consideradas una reparación justa es, a fin de cuentas, siempre una cuestión subjetiva a la que la mayoría de los afectados ya no puede contestar por razones simplemente biológicas. Y sin embargo, la propuesta provocó una tormenta de respuestas lanzadas a menudo desde posturas diametralmente opuestas. Lejos de dejarse seducir por la retórica conciliadora del texto, la derecha respondió con un rechazo rotundo, calificando el proyecto de “un enorme error que no sirve a ningún efecto”. Igual de tajante resultó el juicio de Esquerra que lo caracterizó de “engaño” y “acto de cinismo”. Críticas más razonables se centraron en los déficits e insuficiencias del texto que, de hecho, representa una especie de compromiso mínimo. Porque resulta cuestionable que el Estado no se atreva a obligar a los ayuntamientos a retirar símbolos franquistas del espacio público y que tampoco asuma toda la responsabilidad en lo que a la localización y exhumación de desaparecidos se refiere.<sup>16</sup> Otro punto muy criticado por los expertos fue la renuncia del Ejecutivo de anular los juicios sumarios, mientras que la Generalitat de Catalunya ya anunció su decisión de seguir reclamando la rehabilitación jurídica de su presidente histórico, Lluís Companys.<sup>17</sup>

Sin embargo, a pesar de las muchas críticas vertidas desde todos los ámbitos políticos, no son tan negativas las expectativas para convertir lo propuesto en norma. El apoyo necesario lo podrían prestar los diputados nacionalistas de PNV y CiU, las únicas formaciones que dieron señales de una actitud favorable. Así, el PNV anunció que aceptará el texto del gobierno como base “adecuada” para la tramitación parlamentaria. Y el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, dio aún un paso más y calificó la oferta de “equilibrada y respetuosa”.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Cfr. M. G.: “La ley de memoria costará 60 millones y beneficiará a más de 30.000 personas”, en: *El País*, 3/08/2006.

<sup>16</sup> Cfr. “Un proyecto de ley que no satisface a nadie”, en: <<http://www.elmundo.es>> (28/07/2006).

<sup>17</sup> Cfr. Mauri, Luis: “El Govern insiste en pedir que se anulen los juicios”, en: <<http://www.periodico.com>> (29/07/ 2006).

<sup>18</sup> Cfr. Oliva, Montse: “CiU veu la llei respectuosa i ICV i Esquerra la veten”, en: *Avui*, 29/07/2006.

## 5. Conclusión

La historia siempre suele suscitar controversias, y aún más cuando se trata de un pasado que ha dividido de manera traumática y durante mucho tiempo la sociedad. Pero si aún cabía alguna duda, son las confrontaciones recientes las que pueden servir para confirmar lo prudente que fue la decisión de los protagonistas de la Transición de dejar fuera del debate político las memorias amargas de más de cuarenta años de historia. Por otro lado, y dadas las circunstancias actuales, parece que los conflictos sobre el pasado, al menos en sus extremos, están motivados más por intereses políticos que por las pretensiones de los históricamente afectados. En todo caso, resulta que a la luz de ciertas encuestas públicas, ninguna de las dos opciones extremas en este asunto encuentra un apoyo mayoritario. Repetidos sondeos han demostrado que –al contrario de los intentos de deslegitimar la transición– ésta sigue siendo un objeto de orgullo para la gran mayoría de los españoles (Avilés Farré 2002: 89s.). Y una encuesta ya citada, que se realizó con ocasión del trigésimo aniversario de la entronización del rey Juan Carlos en noviembre del 2005, pone de relieve una mayoría de tres cuartos de los encuestados que se pronunciaron a favor de la monarquía, mientras que esta institución suele recibir siempre las mejores valoraciones entre todas las instituciones políticas del país.<sup>19</sup> Más ilustrativos en lo que a propuestas legislativas se refiere, son los resultados del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de octubre 2005 que ya había incluido preguntas acerca de la anunciada “Ley de Memoria”. Según estos datos, un 65% reconoce la enorme desigualdad en el tratamiento de las víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil. Pero a pesar de esto, ascienden a más de un 70% los que se expresan a favor de un reconocimiento equilibrado que incluya de igual manera a vencedores y vencidos, postura que se corresponde con la reorientación del Ejecutivo socialista en este asunto.<sup>20</sup>

La posición del gobierno fue reconfortada también por los resultados de otra encuesta realizada con ocasión del 18 de julio de 2006. Así,

---

<sup>19</sup> Cfr: Escrivá, Ángeles: “España da un notable a la monarquía pero un 38% de jóvenes prefiere la República”, en: <<http://www.elmundo.es>> (20/11/2005) y el dossier “El rey del cambio”, en: *El País*, 22/11/2005.

<sup>20</sup> Cfr: el barómetro de octubre de 2005 en <[www.cis.es](http://www.cis.es)>.

un 64,5% se mostró “partidario de que se investigue todo lo relativo a la Guerra Civil, se descubran las fosas comunes y se rehabilite a todos los afectados”, mientras que sólo un 25% se pronunció en contra. Tal apoyo se relativiza si se divide en base a la inclinación política del encuestado. Porque mientras que un 77% de los votantes socialistas están a favor de tal idea, los adversarios votaron mayoritariamente al Partido Popular. Pero a pesar de esto, la minoría favorable entre los votantes populares es también considerable, ascendiendo a un 44,8%.<sup>21</sup> Con todo, no parece demasiado atrevido concluir a partir de tales datos que el espíritu del consenso está mucho más extendido en el seno de la sociedad que actualmente en las élites políticas.

## Bibliografía

- AMNISTÍA INTERNACIONAL (2005): “España: poner fin al silencio y a la injusticia”, en: <[http://www.es.amnesty.org/esp/docs/victimas\\_franquismo.pdf](http://www.es.amnesty.org/esp/docs/victimas_franquismo.pdf)> (07/2005).
- ARÓSTEGUI, Julio (2006): “Traumas colectivos y memorias generacionales: el caso de la Guerra Civil”, en: Aróstegui, Julio/Godicheau, François (eds.): *Guerra Civil. Mito y Memoria*. Madrid, pp. 57-92.
- AVILÉS FARRÉ, Juan (2002): “Veinticinco años después: la memoria de la transición”, en: *Historia del Presente* 1, pp. 88-97.
- BERNECKER, Walther L. (2005): “Recuperando la memoria histórica: fosas comunes en España. Entrevista con Emilio Silva”, en: *Iberoamericana* 19, pp. 179-188.
- EQUIPO NIZKOR (2004): “La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas”, en: <<http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impuesp.html>> (04/2004).
- GRUP PER A L'ANUL·LACIÓ DEL PROCÉS AL PRESIDENT COMPANYYS (1991): *Entre el mite i l'oblit*. Barcelona.
- JULIÁ, Santos (coord.) (2006): *Víctimas de la Guerra Civil*. Madrid.
- RADCLIFF, Pamela (1997): “La representación de la nación. El conflicto en torno a la identidad nacional y las prácticas simbólicas de la Segunda República”, en: Cruz, Rafael/Pérez Ledesma, Manuel (eds.): *Cultura y movilización en la España contemporánea*. Madrid, pp. 305-325.

---

<sup>21</sup> Cfr: “El 64% de los españoles quiere que se investigue la Guerra Civil y se rehabilite a las víctimas”, en: *El País*, 18/07/2006.